

hecha referencia, quedando sujetos á la indemnizacion al denunciante en los términos dispuestos en el último concepto del artículo único del decreto de 19 de Setiembre de 1863.

Segundo; previa la conveniente audiencia por incidente separado, se declarará quien debe percibir dicha indemnizacion entre los CC. Silvano Mendoza y Vicente García, á quienes oportunamente se citará el efecto.

Tercero; ejecutoriado que sea el presente fallo, se evacuará el trámite prescrito en el art. 16 de la ley de 20 de Julio de 1863 para pronunciar el auto de adjudicacion, de acuerdo con lo resuelto en el punto primero.

Cuarto; los opositores quedan obligados á denunciar los demas terrenos de Istacmitan y Parrilla dentro de tres meses, conforme al art. 8º de la misma ley, y bajo la alternativa que él mismo les impone, cuyo término se les computará desde la fecha en que este fallo pase en autoridad de cosa juzgada. Lo provoyó y firma el C. Lie. Límbaro Correa, juez de Distrito del Estado por ante mí el infrascrito escribano que doy fé.—*Límbaro Correa.*—Ante mí. *Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Agosto diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Gabriel Sosa.*

## VERBAL.

*Juicio seguido en el juzgado de Distrito de Michoacan por el Ministerio público contra D. Ignacio Ponce de Leon, sobre pago del derecho de traslación de dominio de una finca y multa del cuatro tanto.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Denunciado como clandestino ante la

Administracion principal de rentas de esta ciudad el contrato de compraventa de una finca urbana que por valor de mil novecientos pesos enagenció el Sr. D. Ignacio Ponce á D. Nicanor Torres en 8 de Julio de 1867; se procedió desde luego á la averiguacion respectiva para los efectos de la ley; y como ningun resultado se obtuvo en la oficina del Estado ni en la Gefatura de hacienda á donde se pasaron las diligencias, se ocurrió á este juzgado para que resolviera lo que fuese de justicia sobre el particular. Hecha la declaratoria de que el Sr. Ponce debía pagar los derechos de alcabala con la multa correspondiente por la ocultacion del contrato, se exigió por la Gefatura la exhibicion de toda la suma; pero sin que se obtuviera el resultado final, porque el interesado manifestó tener excepciones que alegar ante la autoridad competente. Vueltos por tal motivo los autos á este juzgado, se pidió en forma por este Ministerio el cumplimiento de la declaratoria antes dicha, así como el que se asegurasen los bienes del responsable, de conformidad con la ley de 20 de Enero de 1837 y el auto 26 del quinto folio de Monte Mayor y Beleña.

El apoderado del Sr. Ponce se exceptuó en su respuesta con el documento que acompaña y se registra á la foja 31 de los autos, y que no es otra cosa que la copia simple del relacionado contrato, que suscriben como testigos presenciales el Sr. Lie. Barrera y su esposa. Con este documento se pretende destruir la ocultacion de la compraventa por lo que toca á los derechos del fisco, pues expresamente se dice en la cláusula 4ª que los derechos de alcabala serán de cuenta del vendedor.

El Ministerio fiscal no cree en manera alguna destruido el cargo que resulta de la ocultacion, por ser esta una circunstancia que ha venido desde su principio acompañando al referido contrato. Verdad es que los interesados no podian ignorar los términos del mismo, supuesta la copia simple de que se ha hablado, pero por lo mismo que

fué un hecho enteramente privado, la hacienda pública federal estaba muy ajená de saber cuáles eran sus derechos, nacidos de un contrato que absolutamente ignoraba. En 8 de Julio de 1867 fué celebrado y consumado, y sin embargo hasta el 18 de Diciembre de 869 se hizo la denuncia de su ocultación. Si como este hecho pasó á los dos años y meses de haberse enajenado la finca no hubiera habido hasta hoy denuncia alguno, ¿habría podido hacer en justicia su reclamación la hacienda pública federal por lo que toca á los derechos que la ley le otorgaba en las traslaciones de dominio? Evidentemente que no, supuesto que la existencia del contrato vino á conocerse por un simple accidente. Ilé aquí por qué el contrato en cuestión merece con justicia el calificativo de clandestino.

Para evitar los fraudes que pueden resultar de estos contratos, previene entre otras, la ley 14 tit. 12 lib. 10 de la Novísima Recopilación que las ventas de bienes raíces se hagan constar por escritura pública, y la real cédula de 5 de Setiembre de 1791 reputa como clandestinas aquellas ventas de los mismos bienes que no constan de la manera expresada. El art. 5º de la ley de 18 de Febrero de 856 impone á los escribanos, bajo de multas y otras penas, la obligación de participar á las oficinas el otorgamiento de escrituras de dichos contratos.

Mas tampoco puede sostenerse que en el de que nos ocupamos no se quiso defraudar los derechos fiscales, atento el convenio antes citado, porque si el otorgamiento de la escritura se consideró como una condición indispensable para los efectos del contrato, previa la satisfacción del precio por parte del comprador, nunca debió este entrar en la posesión de la finca, ni exhibir siquiera una parte de su precio, sin quedar comprendido por este hecho el referido contrato en la disposición relativa del artículo 7º del decreto de 11 de Junio de 843.

Por todo lo expuesto el promotor pide á

vd., que por los fundamentos legales que expresa, se sirva condenar á la parte del Sr. Ponco al pago de la alcabala que importa según la liquidación de la gefatura de hacienda, ciento treinta y seis pesos cincuenta y seis centavos, y al de la multa que suma trescientos ochenta pesos, de conformidad con lo prevenido en la ley 13, tit. 13, lib. 8 de la R. de Indias y en el art. 129 de la instrucción de alcabalas de 31 de Marzo de 1794.

Morelia, Mayo primero de mil ochocientos setenta y uno.—*N. Oballero*.—Una rúbrica.

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Morelia, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos seguidos por el Promotor fiscal contra D. Ignacio Ponco de Leon, sobre pago de alcabala y multa del cuatro tanto, por defraudación de aquel impuesto; lo alegado por las partes; las pruebas rendidas por ambas, la citación para sentencia y cuanto mas forma el expediente; y

Considerando: que la parte demandada celebró contrato de venta de una casa ubicada en esta ciudad, con el O. Nicanor Torres el 8 de Julio de 1867, haciéndose constar aquel, en el documento provado de fojas 31 ante dos testigos, cuyas firmas, así como las de las partes contratantes, han sido legalmente reconocidas. Que en la época en que se celebró aquel contrato, pertenecía aun á las rentas federales la mitad del impuesto á las traslaciones de dominio;

Que en el documento de dicho contrato se estipuló que el vendedor pagaría la alcabala;

Que está plenamente probado en autos que el comprador recibió inmediatamente la cosa y el vendedor parte del precio;

Que en el tiempo transcurrido desde la fecha del contrato hasta el de la denuncia, estaba enteramente pagado el vendedor.

Que el 13 de Diciembre de 1869 en que fué denunciado el contrato ante la oficina respectiva, aun no se habia presentado á esta Ponce á hacer el pago de la alcabala á que se obligó. Que de todas estas constancias, resultan probados estos dos hechos:

Primero; que el contrato de compraventa ajustado entre los Sros. Ponce y Torres causó desde la fecha de su celebracion el derecho de alcabala, conforme á lo prevenido en el art. 7º de la ley de 11 de Junio de 1843;

Segundo; que pasaron mas de dos años sin que el causante se presentara á la oficina á hacer el pago de aquel impuesto: Que con estos hechos que constan justificados y que no ha negado el Sr. Ponce, queda suficientemente probada, no la ocultacion del contrato, por que esta no la hubo supuesto el modo y forma en que aquel se celebró, pero si, la defraudacion al erario de una cantidad á la que tuvo derecho desde el momento en que el contrato quedó consumado, cuya defraudacion hizo al Sr. Ponce incurrir en las penas impuestas por las leyes 19 tit. 12 lib. 10 de la Novísima Recopilacion y 13 tit. 13 lib. 8 R. de Indias, cuyas disposiciones castigan no solo la ocultacion del contrato, sino tambien la defraudacion de los derechos fiscales. Por todas estas razones como pide el C. Promotor y por los fundamentos legales en que se apoya, se declara:

Primero; se condena á D. Ignacio Ponce de Leon al pago de la cantidad de ciento treinta y seis pesos cincuenta y seis centavos que importan los derechos fiscales por alcabala del contrato de venta de una finca de su propiedad.

Segundo; se impone al citado Ponce una multa equivalente al cuatro tanto del derecho de alcabala, cuya cantidad, así como la anterior, enterará en la gefatura de hacienda del Estado, á la que se comunicará este fallo para su cumplimiento. Definitivamente juzgando, lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fe.

—Gabino Ortiz. Una rúbrica.—Ante mí. Isidro Aleman. Una rúbrica.

Es copia que certifico Morelia Julio once de mil ochocientos setenta y uno —Isidro Aleman, escribano público.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por Dolores Sanchez, contra el jefe Político de la capital por prision arbitraria.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Sr. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Dolores Sanchez se queja de que está detenida de orden del C. jefe político de esta ciudad: que han trascurrido mas de tres días sin habersela declarado bien presa, ni condenándola á sufrir gubernativamente alguna pena.

Halla con ese hecho vulnerada en su persona la garantía individual, cuyo goce le asegura el art. 19 de la Constitucion federal; y apoyada en la fraccion 1ª art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, pide amparo y proteccion en contra del C. jefe político por el motivo referido.

Pedido informe con justificacion á esa autoridad, manifiesta en el que rindió: que Dolores Sanchez es muger pública y como tal está sujeta á las prescripciones higienicas del reglamento especial de policia, dando para las mugeres de esa clase: que habiendo infringido tales prescripciones la ha puesto en arresto entre tanto las llena á asegurar retirarse de la prostitucion.

No habiendo detencion, ni intentándose ningun procedimiento criminal contra Dolores Sanchez y solo tratándose de atender con el arresto de ella á las necesidades de la higienia pública, no ha habido atentado que reparar, y por esto el Promotor pide que se resuelva que: